

Destaco la precisión con la cual el doctor MARTIN BERMUDEZ aborda el tema relativo a las excepciones previas y al respecto me refiero a cuatro (04) puntos concretos:

En primer lugar, considero oportuno indicar que el conferencista no refiere en su presentación que sea necesario formular las excepciones previas en escrito separado, posición que comparto plenamente, ya que a pesar que dicha exigencia se encuentra consagrada en el Código General del Proceso, al cual es necesario remitirse por expresa disposición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que la aplicación del estatuto procesal sigue siendo residual, a falta de norma especial y en todo caso, la ley 1437 de 2011, al regular el contenido de la contestación de la demanda, expresamente dispone que en ella pueden proponerse excepciones, sin distinguir si se trata de previas, mixtas o de fondo, tema que se abordó en la mesa de trabajo del 17 de agosto de 2021.

En ese orden de ideas, la previsión contenida en el artículo 173 del Código General del Proceso, referida a exigir la previa formulación de petición a las partes (en especial al demandante), para que proceda el decreto de las pruebas, resulta inaplicable en los procesos que se tramitan en la jurisdicción contencioso administrativa, que al regular el contenido de la demanda y su contestación, admiten que se soliciten todas aquellas que se requieran, sin limitar o exigir como requisito previo la formulación de solicitudes en ejercicio del derecho fundamental de petición. Desde este aspecto, no comparto esta apreciación del doctor MARTIN BERMUDEZ, tema que ya ha sido aclarado por el Consejo de Estado.

En relación con la noción de **práctica** de pruebas planteada por el expositor, en el entendido que se trata de aquellas que requieren de la realización de una audiencia para su **práctica**, es decir los testimonios, interrogatorios de parte, pruebas periciales, entre otros, implicaría que en todos aquellos asuntos en los cuales se soliciten exclusivamente pruebas documentales (aun siendo pertinentes, conducentes y útiles), deberían decretarse mediante auto antes de la audiencia inicial, recaudarse, correr traslado de ellas y si no hay oposición, dictar sentencia anticipada. Considero que con esta perspectiva podría ampliarse el campo de aplicación de la sentencia anticipada, bajo el entendido que el recaudo de la prueba exclusivamente documental, permitiría prescindir del trámite de la audiencia inicial y de la de pruebas, no obstante, como dicha posibilidad no se encuentra regulada expresamente, considero que siempre que se solicite el decreto de pruebas, aunque sean únicamente documentales, es pertinente realizar la audiencia inicial para decretarlas y agotar el correspondiente periodo probatorio.

Me identifico con la postura del doctor BERMUDEZ, en el sentido que no es necesario fijar el litigio en el auto que precede la expedición de sentencia anticipada, porque puede dilatar el trámite con eventuales recursos, además, sólo sería susceptible de reposición y en todo caso, el planteamiento de los extremos de la litis, el problema jurídico y los hechos probados, deben ser abordados en el fallo, frente al cual procede el recurso de apelación.

Yenny López Alegría